

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

Auto Interlocutorio No. _____

MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - TRIBUTARIO
EXPEDIENTE	76001-23-33-000-2020-00075-00
DEMANDANTE	MONDELEZ COLOMBIA S.A.S. notificaciones.judiciales@co.ey.com
DEMANDADO	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co
ASUNTO:	Auto admite demanda

ANTECEDENTES

MONDELEZ COLOMBIA S.A.S. a través de apoderado judicial, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, demanda a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN y pretende¹ la nulidad de los siguientes actos administrativos:

- Liquidación oficial de revisión nro. 052412018000088 proferida el 26 de septiembre de 2018², a través de la cual se modificó la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2016.
- Resolución No. 992232019000145 del 26 de septiembre de 2019³, proferida por la subdirección de gestión de recursos jurídicos de la dirección jurídica de la DIAN, a través de la cual se decidió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión.

Como restablecimiento del derecho solicitó se reconozca la firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2016 y la devolución del saldo a favor solicitado con sus respectivos intereses, así como la condena en costas y agencias en derecho a que haya lugar.

CONSIDERACIONES

Corresponde al Despacho pronunciarse sobre el medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho, a fin de verificar si la misma cumple los requisitos legales para ser admitida.

¹ Ver folio 4
² Ver folios 92-110
³ Ver folios 114-133



1. DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Conforme a los artículos 104 y 152 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa y *“De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía sea superior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”*

En el presente asunto, se pretende la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementario del año gravable 2016.

1. .1 Factor territorial

El numeral 2 del artículo 156 del CPACA en cuanto a la competencia territorial señala: *“En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde se expidió el acto, o por el del domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga oficina en dicho lugar.”*

En el presente asunto, se observa que los actos administrativos acusados fueron proferidos por la División de Gestión de Recaudo y por la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Cali, además el domicilio del demandante se encuentra en el municipio de Cali, por tal razón se encuentra debidamente configurada la competencia por el factor territorial en el presente asunto.

1.2 Factor Cuantía

El artículo 157 del CPACA respecto a la competencia por razón de la cuantía señala:

“ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.”

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente⁴:

“(…) De acuerdo con las normas transcritas, con la entrada en vigencia de la Ley 1437, esto es, a partir del 12 de julio de 2012, se hace necesario determinar en materia tributaria el objeto del proceso con el fin de establecer la competencia funcional del Juez o Tribunal, ya que si el asunto versa sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, su conocimiento radica en los Tribunales Administrativos si la cuantía supera los 100 salarios mínimos, mientras que si es inferior a esta su conocimiento en primera instancia radica en los Juzgados Administrativos.

La regla de competencia explícita que se comenta trata únicamente del tributo, no de la sanción, lo que, en principio permite excluir de la regla de competencia específica a las controversias que versen sobre sanciones, caso en el cual se acude a la regla general consagrada en el artículo 152-3, que la radica en los Tribunales Administrativos cuando la cuantía supera los 300 salarios mínimos, mientras que si es inferior a esta suma su conocimiento en primera instancia se radica en los Juzgados Administrativos, conforme al artículo 155-3 ibídem.

Se dice que en principio, porque dicha regla es clara cuando la pretensión ataca únicamente la sanción, como sucede en este caso donde el acto administrativo sólo impuso la multa. Cuestión diferente sería la pretensión que versa sobre el impuesto mismo y la sanción, pero en tal caso debe tenerse presente que la cuantía se establece por la sumatoria del valor discutido por concepto del impuesto y las sanciones –artículo 157 Ley 1437- o por aplicación de la regla especial determinada en función del impuesto, no de la sanción, pero este no es el caso que se trata. (…)

(…) En ese orden de ideas, se concluye que con la Ley 1437 el Legislador fijó dos Reglas de competencia en materia tributaria. La regla especial para los procesos en los que se discuta el monto, la distribución o asignación de impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales, municipales o distritales -100 salarios mínimos- y, la regla general, para los procesos en los que se impugnen otro tipo de actos administrativos en uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho -300 salarios mínimos-; por lo que es necesario para determinar la competencia en cada caso, un análisis de las pretensiones y de los fundamentos de la demanda para efectos de establecer el asunto del proceso. (…)”

La estimación razonada de la cuantía señalada en el libelo de la demanda⁵ hace referencia a un tope mayor de los 100 SMLMV⁶, al reclamarse la devolución del

⁴ Consejo de Estado, Sección Cuarta, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, providencia del 01 de octubre de 2013, EXP No. 25000-23-27-000-2013-00290-00(20246).

⁵ Ver folios 2 a 3

⁶ Salario mínimo 2020 = 877.803 x 100 SMLMV = \$87.780.300 pesos

saldo a favor \$ 7.987.199.000 y la firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2016 por valor de \$4.90.020.000 pesos.

2. REQUISITO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

El Despacho advierte que antes de incoar las acciones contencioso administrativas se debe hacer la conciliación prejudicial como lo consagra el numeral 1 del artículo 161 del CPACA: *“Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.”*

Sin embargo, el parágrafo 1º del artículo 2º del Decreto 1716 de 2009⁷ consagra lo siguiente:

“ARTÍCULO 2º. ASUNTOS SUSCEPTIBLES DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que los sustituyan.

Parágrafo 1º. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:

- Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.*
- Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.*
- Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.”*
(Subraya fuera de texto).

Por lo anterior y al tratarse de un asunto de carácter tributario por discusión de impuestos, no es requisito de procedibilidad la conciliación prejudicial.

3. DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

Respecto de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA dispone: *“2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (...) d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales.”*

⁷ Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.



La Resolución nro. 992232019000145 del 26 de septiembre de 2019 que resolvió el recurso de reconsideración, fue notificada personalmente al representante legal suplente de la sociedad demandante, el día 02 de octubre de 2019, por lo que los cuatro (4) meses del medio de control vencían el 03 de febrero de 2020 y, como la demanda fue presentada el 31 de enero de 2020, se realizó dentro del término legal establecido.

4. DEL PODER Y LA LEGITIMACIÓN EN ACTIVA Y PASIVA.

Con relación a la legitimación por activa, se tiene a esta como la posibilidad que tiene aquella persona que ha sufrido un daño para obtener el resarcimiento por medio de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Respecto al derecho de postulación, el artículo 160 del CPACA señala que: *“Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.”*; a folio 20 obra poder otorgado por la parte demandante.

Frente a la legitimación y la representación de las entidades públicas el artículo 159 del CPACA dispone: *“Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.”*

El apoderado de la parte demandante, dentro de la descripción fáctica hecha en el escrito de demanda, hace imputaciones a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, pues pretende la nulidad de la liquidación oficial de revisión nro. 052412018000088 del 26 de septiembre de 2018 y la Resolución No. 992232019000145 del 26 de septiembre de 2019, a través de la cual se decidió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión que modificó la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2016. En ese orden de ideas, la parte demandante y la entidad demandada están legitimadas materialmente, por activa y por pasiva respectivamente, para actuar en las presentes actuaciones.

5. DE LOS REQUISITOS FORMALES.



La demanda cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los artículos 162 (requisitos de la demanda⁸) 163 (individualización de pretensiones⁹) y 164 (oportunidad de la demanda) de la Ley 1437 de 2011.

Además, se allegaron los anexos pertinentes que exige el art. 166, incluyendo copia de la demanda en mensaje de datos para los efectos del inciso 3 del art. 199, modificado por el art. 612 de la Ley 1564 de 2012.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 806 de 2020, se requerirá a la parte demandante para que aporte la información y documentación señalados en la referida norma¹⁰.

Por reunir los requisitos legales el Despacho,

R E S U E L V E:

PRIMERO: ADMITIR la demanda del medio de control **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, instaurada por la sociedad **MONDELEZ COLOMBIA S.A.S** contra la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN** y en consecuencia dispone:

SEGUNDO: NOTIFICAR este auto al demandante en la forma prevista en el artículo 9 del Decreto 806 de 2020, quien podrá consultarlo en la página web: www.ramajudicial.gov.co.

TERCERO: No hay lugar a fijar gastos ordinarios del proceso, pues la notificación personal corresponde a la parte actora; no obstante, de requerirse expensas, éstas se fijarán en su oportunidad.

CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente providencia a la parte demandada **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN**, al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO** y a la **AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO** a los buzones de correos electrónicos creados por dichas entidades para efecto de recibir notificaciones judiciales de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 198 y 199 del CPACA. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, la notificación se entenderá realizada una vez transcurridos dos (02) días hábiles siguientes al envío del mensaje.

⁸ Designación de las partes: folio 1

Pretensiones: folio 4

Los hechos y omisiones 4-19

Fundamentos de Derecho y concepto de violación folios 20-77

Las pruebas folio 78, estimación razonada de la cuantía folio 2

Lugar y dirección de las partes folio 79

⁹ Folios 4

¹⁰ - Canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso.

- Anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda.



La parte demandante deberá remitir al correo electrónico rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co, dentro de los CINCO (05) DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación por estado de la presente providencia, la constancia de remisión efectiva de la copia de la demanda, sus anexos y del auto admisorio.

Hasta tanto no se alleguen las constancias anteriormente referidas, la Secretaría de esta Corporación no realizará la notificación personal a los demandados. El incumplimiento de esta carga procesal dará lugar a la aplicación del artículo 178 del CPACA.

QUINTO: A la entidad demandada **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN**, al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO** y a la **AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO** se les correrá traslado de esta demanda por el término de treinta (30) días para contestarla, proponer excepciones, pedir pruebas, llamar en garantía y en su caso, proponer demanda de reconvención, acorde con el artículo 172 del CPACA.

SEXTO: RECONOCER PERSONERÍA para actuar, como apoderados de la parte demandante, a la abogada MARGARITA DIANA SALAS SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía nro. 51.941.390 y portadora de la tarjeta profesional nro. 76.891 del Consejo Superior de la Judicatura, a la abogada ANA MARÍA BARBOSA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía nro. 39.542.309 y portadora de la tarjeta profesional nro. 73.983 del Consejo Superior de la Judicatura, al abogado HECTOR HERNANDO DUQUE GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía nro. 1.072.644.822 y portador de la tarjeta profesional nro. 239.245 del Consejo Superior de la Judicatura, a la abogada SONIA ANDRES GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía nro. 414.527 y portadora de la tarjeta profesional nro. 282.107 del Consejo Superior de la Judicatura en los términos y para los efectos a que alude el memorial poder por ellos presentado¹¹.

Advirtiéndole que no podrán actuar simultáneamente, de conformidad con lo establecido en el inciso 3º del artículo 75 del C.G.P.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

¹¹ Ver folios 81-83
Vo.Bo.Secretario
Nathaligg

Radicación
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-33-000-2020-00075-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: MONDELEZ COLOMBIA S.A.S.
: DIAN



A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, characteristic of a cursive signature.

FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ
Magistrado